

OBSERVACIONES DE LA CORTE SUPREMA A LAS PROPUESTAS DE NORMAS PRESENTADAS EN LA COMISIÓN EXPERTA

Santiago, 14 de abril de 2023.

I. OBSERVACIONES AL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1. Función jurisdiccional

(Iniciativa de normas referentes al “Poder Judicial”)

Artículo 1. La Función Jurisdiccional.

1. *La función jurisdiccional es la facultad de conocer y resolver los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que radica exclusivamente en los tribunales previamente establecidos por la ley.*
2. *En el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces se sujetarán a la ley y no podrán en caso alguno atribuirse potestades de otros poderes públicos ni ejercer otras funciones que las expresamente determinadas en la ley.*
3. *En toda actuación jurisdiccional los jueces procurarán garantizar el acceso a la justicia y actuarán siempre respetando el debido proceso, en conformidad a la ley.*
4. *La ley propenderá a la utilización de la mediación y de medios alternativos de resolución de conflictos.*

Respecto al artículo 1 de la propuesta sobre “Poder Judicial” presentada en la Comisión Experta, se considera apropiada la **definición de la función jurisdiccional** que allí se contiene, que junto con mantener los elementos clásicos y darle carácter exclusivo a esa función a los tribunales previamente establecidos por ley (numeral 1), hace referencia al acceso a la justicia y el debido proceso (numeral 3) e incluye los medios alternativos de solución de conflictos como propósito de la ley (numeral 4). Sin perjuicio de lo dicho, en el numeral 2 de este artículo se alude como deber del juez la sujeción a “la ley” en su actuación, estimándose pertinente **incluir también a la Constitución** como elemento al cual deben someter su acción los jueces y juezas.

2. Fundamentos Constitucionales de la función jurisdiccional / Principios de la función jurisdiccional

(Iniciativa de normas referentes al “Poder Judicial”)

Artículo 2. Fundamentos Constitucionales de la función jurisdiccional.

Los fundamentos constitucionales de la función jurisdiccional están dados por los principios de:

- a) **Independencia.** *El Presidente de la República, el Congreso Nacional y los demás órganos del Estado, persona o grupo de personas, no podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos.*

b) **Imparcialidad.** Los tribunales resolverán con objetividad los asuntos que conozcan, sin influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas internas o externas.

c) **Inexcusabilidad.** Reclamada la intervención en forma legal y en negocios de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión, salvo que su conocimiento se encuentre pendiente en otro tribunal.

d) **Imperio:** Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren.

Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.

e) **Responsabilidad.** Los jueces son personalmente responsables en sus actuaciones jurisdiccionales por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones y por los demás casos que expresamente determine la ley.

Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad.

Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley.

f) **Inamovilidad.** Los jueces que integran el Poder Judicial permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento.

En cuanto a la propuesta relativa a los **fundamentos Constitucionales de la función jurisdiccional** -o Principios de la función jurisdiccional- (art. 2), cabe considerar que además de los principios que acertadamente consigna la disposición sugerida, se estima necesario agregar otros que tienen estrecha relación con la función jurisdiccional, tales como el principio de **respeto y vigencia efectiva de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales**; los principios de **legalidad, autonomía, tutela judicial efectiva y oportuna**; y los principios de **integridad, transparencia, perspectiva de género, reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios, no discriminación arbitraria y atención especial para personas pertenecientes a grupos vulnerables**.

Asimismo, respecto de los principios que aparecen definidos en los distintos literales de la norma, cabe señalar, en primer término, que la **independencia** (letra a) del artículo 2) aparece abordada sólo en su fase externa y no interna, por lo que cabe sugerir la incorporación de dos menciones:

- Que los miembros de los tribunales de justicia han de ser independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad y sólo estarán sujetos a la Constitución y las leyes, debiendo ejercer su competencia con imparcialidad; y

- Que los miembros de los tribunales de justicia deben ejercer la función jurisdiccional en las materias y con las funciones que la ley les asigna, en las cuales tienen plena jurisdicción.

Por otra parte, se aprecia que dentro del principio de **responsabilidad** (letra e) se contiene, en su inciso segundo, lo que corresponde al denominado fuero de los jueces y juezas. Por su importancia, se considera que resultaría más apropiado consignar esta disposición alusiva a la **inviolabilidad** (fuero) de los jueces y juezas como norma autónoma, separada de la responsabilidad.

Asimismo, respecto de la **inamovilidad** (letra f), ella aparece consignada más bien como un deber del juez —en el sentido de conservar dicho atributo mientras mantengan su buen comportamiento— más que como un verdadero principio de la jurisdicción, siendo recomendable incorporar en esta misma norma las causales de cesación del cargo de juez o jueza (que aparecen regulados en el artículo 8 de la propuesta).

Finalmente, cabe advertir la omisión en la propuesta de la inclusión del principio de **unidad de jurisdicción**, en virtud del cual todos los tribunales debieran quedar bajo la estructura del Poder Judicial, dejando exentos únicamente a la Justicia Constitucional y a la Justicia Electoral (TRICEL y Tribunales Electorales Regionales).

3. Corte Suprema

(Iniciativa de normas referentes al “Poder Judicial”)

Artículo 3. La Corte Suprema.

1. El máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial será la Corte Suprema que estará compuesta por veintiún ministros. La Corte Suprema representará a los tribunales de justicia frente a los demás poderes del Estado.

2. Los integrantes de la Corte Suprema durarán veinte años en sus funciones.

En lo que refiere al artículo 3 de la propuesta en comento, que regula la **conformación y función de la Corte Suprema**, cabe advertir que si bien se considera adecuado el número de ministros que integran este tribunal (21), se estima que podría ser objeto de mejoras dicha norma en tres sentidos.

En primer lugar, en el numeral 1 de esta disposición pareciera no comprenderse de su solo texto el alcance de la segunda parte de dicha norma, que prescribe que la Corte Suprema representará a los tribunales de justicia frente a los otros poderes del Estado, toda vez que ello no pareciera condecirse o armonizarse con las funciones que tendrá la “Comisión Coordinadora de Justicia” que

sugiere el artículo 6 de la propuesta, y que encarga a dicho ente la coordinación de las actuaciones de los cuatro órganos de gobierno judicial que se proponen, entre sí y con la Corte Suprema.

Por otra parte, no se aprecia en la regulación el rol específico en el marco de la función jurisdiccional que le corresponderá a la Corte Suprema, y que debiera ser la de velar por la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes, así como por la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales.

Finalmente, respecto del numeral 2 de la disposición, cabe recalcar la necesidad de que toda regulación que afecte o pueda afectar a personas que se encuentren desempeñando cargos al momento de su entrada en vigencia, debiera ser objeto de regulación mediante una norma transitoria.

4. Organización del Poder Judicial y la función jurisdiccional

(Iniciativa de normas referentes al “Poder Judicial”)

Artículo 4. Organización del Poder Judicial y la función jurisdiccional.

1. Una ley de quórum determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará los requisitos que respectivamente deban cumplir los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

2. La ley relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley respectiva.

3. La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente, habiendo oído previamente al órgano autónomo correspondiente de los que establece este capítulo, de conformidad a la ley de quórum.

4. Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte. En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.

Si la Corte Suprema no emitiera opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.

5. La ley de quórum relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años.

El artículo 4 de la propuesta en análisis delega adecuadamente en el legislador la determinación de la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, y regula con mayor detalle que la actual constitución la participación que mantendría la Corte Suprema en la opinión sobre iniciativas legales referentes a esas materias. Sin embargo, respecto a esto último, cabe reiterar la

pertinencia expresada por la Corte Suprema en orden a ampliar el deber de consulta del legislador a la Corte Suprema cuando las normas sobre organización y atribuciones de los tribunales se contengan también en una norma de tipo constitucional.

5. Gobierno Judicial

(Iniciativa de normas referentes al “Poder Judicial”)

Artículo 5. Gobierno Judicial.

Para el nombramiento, función disciplinaria, formación de jueces, así como la gestión y administración del Poder Judicial, existirá un órgano por cada uno de ellos, los que funcionarán autónomamente y de forma coordinada. Una ley de quórum regulará las competencias y determinará la composición, organización, funcionamiento y demás atribuciones de cada uno de los órganos que compondrán el gobierno judicial.

Artículo 6. Comisión Coordinadora de Justicia.

- 1. Existirá una comisión encargada de coordinar la actuación de los órganos referidos en el artículo anterior, entre sí y con la Corte Suprema, sin perjuicio de su funcionamiento autónomo.*
- 2. Una ley de quórum regulará la integración, atribuciones y el funcionamiento de esta comisión.*

Artículo 7. Sistema de nombramientos.

- 1. Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Poder Judicial, y con acuerdo del Senado. Este adoptará los respectivos acuerdos por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, el Poder Judicial deberá completar la nómina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.*
- 2. Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley de quórum respectiva.*
- 3. El Poder Judicial formará la nómina correspondiente atendidos los merecimientos de los candidatos evaluados mediante un concurso público de antecedentes, sea que el cargo corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial o se trate de una vacante que deba proveerse con abogados extraños a la administración de justicia.*
- 4. Habrá un Consejo de Nombramientos Judiciales, que será un órgano autónomo y colegiado, que designará a los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, los jueces letrados, y las demás personas que establezca la ley.*
- 5. Una ley de quórum regulará el funcionamiento, establecerá los respectivos mecanismos de selección y designación los que deberán siempre estar basado en un concurso público, transparente y fundado en el mérito y determinará la composición, organización, y demás atribuciones del Consejo de Nombramientos Judiciales.*
- 6. La designación de los jueces, se basará en factores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la integridad y la experiencia.*

Artículo 9. Gestión Administrativa y presupuestaria.

- 1. Un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá la función de*

administrar y gestionar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial. Estará encabezado por un Consejo Directivo.

2. Una ley de quórum determinará la integración, atribuciones y funcionamiento de su Consejo Directivo y la estructura organizacional de este órgano.

Artículo 10. Función disciplinaria.

1. Un órgano autónomo, integrado por los fiscales judiciales, presidido por el fiscal de la Corte Suprema, tendrá por función velar por el correcto actuar de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. Deberá realizar las investigaciones por faltas disciplinarias y a la probidad, y formular acusación, correspondiéndole conocerla y resolverla a una Corte de Apelaciones distinta al territorio jurisdiccional en que cumple funciones el acusado.

2. Los fiscales judiciales no ejercerán en ningún caso funciones jurisdiccionales.

3. La ley establecerá la organización y competencias de este organismo y el procedimiento que seguirán estos procesos, asegurando el debido proceso.

Artículo 11. Formación y capacitación.

1. Un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá por objeto la formación de los postulantes a cargos de jueces y ministros de cortes de apelaciones y el perfeccionamiento de todos los integrantes del Poder Judicial.

2. La dirección superior y administración de este organismo estará a cargo de un Consejo Directivo. Una ley de quórum determinará la integración, atribuciones y funcionamiento de su Consejo Directivo y la estructura organizacional de este órgano.

En cuanto al diseño regulatorio del sistema de **gobierno judicial** sugerido por la propuesta normativa en comento, cabe señalar que la Corte Suprema ha manifestado ya su postura en orden a consagrar en un solo órgano, tipo Consejo de la Magistratura, descentralizado o desconcentrado funcional y territorialmente a nivel regional, que ejerza las funciones propias del gobierno judicial. De no prosperar esa idea y de insistirse en el diseño de una pluralidad de órganos a cargo de las diferentes materias propias del ámbito no jurisdiccional (cuatro más una instancia de coordinación en la propuesta presentada), se estima pertinente tener en cuenta las siguientes observaciones:

- En primer lugar, si bien se reconoce que el legislador debe regular el detalle de los aspectos que hagan posible llevar a la práctica el diseño del nuevo modelo de gobierno judicial, **es menester que la Carta Constitucional defina en forma clara las atribuciones, integración y forma de elección o designación de los miembros de cada uno de los órganos** que formen parte de este sistema.
- La conformación de los órganos a cargo de estas tareas debe considerar una **mayoría de integrantes que sean parte de la magistratura**, elegidos estamentalmente por sus pares. Los demás integrantes debieran representar a los restantes poderes del estado (Ejecutivo y legislativo), al colegio de abogados y al mundo académico.
- La precisión referente a la integración y atribuciones se hace aún más patente tratándose de la **“Comisión Coordinadora de Justicia”**, respecto de la cual, además de las recomendaciones

precedentes, podría considerar en su integración a un representante de cada uno de los consejos o comisiones que abarquen las diferentes áreas del gobierno judicial (cuatro en la propuesta presentada), asegurando que la presidencia de ese órgano se radique siempre en el Presidente de la Corte Suprema, pues ello reduce el riesgo de politización del sistema.

- También en lo que atañe a la “**Comisión Coordinadora de Justicia**”, parece necesario precisar el sentido de la norma que lo prevé respecto a la coordinación con la Corte Suprema, pues podría pensarse que abre un espacio para que este tribunal ejerza un rol en ese papel, lo que podría terminar siendo contradictorio con la propuesta de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas que proclama la Comisión Experta.
- Se aprecia que se proyecta un “**Consejo de Nombramientos Judiciales**”, que se aboca exclusivamente a la función de nombrar a los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, los jueces letrados, y las demás personas que establezca la ley. Sin embargo, tal como lo sugiere la propuesta presentada por la Corte Suprema en su oportunidad, el nuevo sistema de gobierno judicial debiera ocuparse también de los otros aspectos relativos a la **carrera funcionaria**, que no se agotan sólo con el nombramiento, pues también comprende los traslados, permutas y el sistema de evaluación de desempeño.
- También dentro del esquema normativo propuesto sobre el sistema de nombramientos, se proyecta un sistema prácticamente igual que el actualmente vigente de **designación de los ministros y ministras de la Corte Suprema** (elige el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, de una quina elaborada por la Corte Suprema), frente al cual cabe recordar la sugerencia de que sea el Consejo abocado al efecto el que realice dicha tarea directamente. Sobre el particular cabe indicar que una integración del respectivo consejo por los tres poderes del estado, asegura la participación de todos ellos en el proceso de designación a través de ese consejo, pudiendo resultar redundante en tal escenario volver a incorporar un trámite en que se incluya al Ejecutivo y al Congreso Nacional.
- Por otra parte, en cuanto al **sistema disciplinario**, asumiendo –como dice la propuesta- que dicha función estará a cargo de un órgano autónomo, integrado por los fiscales judiciales y presidido por el fiscal de la Corte Suprema, se estima pertinente sugerir que las investigaciones de las faltas disciplinarias y a la probidad sean llevadas a cabo por un fiscal judicial perteneciente a dicho ente, correspondiendo su resolución a un órgano colegiado también perteneciente a dicha organización, compuesto por fiscales judiciales (pudiendo ser tres, por ejemplo) que no hubieren conocido del proceso investigativo, y cuya decisión sea susceptible de ser impugnada ante un órgano colegiado también compuesto por fiscales (excluido los anteriores) presidido por la máxima autoridad del órgano a cargo de la función disciplinaria.

Tratándose de la responsabilidad administrativa de los integrantes de la Corte Suprema, se sugiere que la investigación del asunto sea llevada por la máxima autoridad del órgano a cargo

de la función disciplinaria, correspondiendo su resolución al Pleno de la Corte Suprema, en instancia única.

6. Integración (jerarquía) de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el control de convencionalidad

(Propuesta “Fundamentos del orden constitucional”)

Artículo 3.-

1. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.

Artículo 6.-

1. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes.

2. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona.

Si bien la propuesta de “fundamentos del orden constitucional” contiene una referencia al reconocimiento de **los derechos y libertades fundamentales** y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales (art. 3 numeral 1), cabe recordar la propuesta de la Corte Suprema en tal sentido, en orden a reconocer todos los derechos fundamentales consustanciales a la naturaleza de las personas derivadas de su dignidad, extensiva a los de carácter individual, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, con sus respectivas cualidades indiscutidas (originarios, universales, indivisibles, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, personales, complementarios e interdependientes) y el deber de todas las personas y órganos a respetar, proteger, garantizar, promover, velar y asegurar la vigencia de tales derechos y garantías.

Por otra parte, la propuesta de “fundamentos del orden constitucional” expresa en su artículo 6 como limitación de la soberanía la dignidad de las personas y los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes (numeral 1); así como una suerte de referencia al control de convencionalidad en su fase más propia de criterio de interpretación (numeral 2), al indicar que las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona.

Al respecto, cabe recordar la posición de la Corte Suprema en orden a señalar expresamente en la Carta Constitucional el **carácter supraconstitucional de las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos** y su debida aplicación por cada juez y jueza, debiendo estos velar para que los efectos de las disposiciones de dichos instrumentos no resulten ensombrecidas por la aplicación de leyes internas contrarias a su objeto y fin, de manera que corresponde a toda la magistratura poner en ejercicio el **control de convencionalidad** entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos sometidos a su conocimiento y la norma internacional de Derechos Humanos de que se trate. Dicho control, que implica la incorporación de las disposiciones sustantivas y de los estándares interpretativos del respectivo instrumento internacional de Derechos Humanos para su efectividad, además de ser ejercido de oficio por la judicatura nacional, debiera ser practicado por todos los magistrados y magistradas, en cualquiera de sus niveles y respecto de cualquier tratado internacional de Derechos Humanos.

7. Estados de excepción constitucional

(Propuesta “Fundamentos del orden constitucional”)

Artículo 11. *La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.*

La propuesta referente a los “fundamentos del orden constitucional”, contiene en su artículo 11 la regulación de los **estados de excepción** de una forma marcadamente sintética, limitándose a mencionar que la Carta Fundamental consagra, al menos, los estados de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.

Al respecto, cabe recordar que la actual Constitución expresamente declara la garantía de los justiciables para recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos correspondientes, aún en estados de excepción constitucional, siendo pertinente reiterar la importancia de disposiciones que, como la actualmente vigente, declaran este aspecto como garantía fundamental para el justiciable.

II. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS POR LAS PROPUESTAS

1. Autonomía Financiera

Se aprecia en la propuesta la omisión del principio de **autonomía financiera del Poder Judicial**, en cuya virtud se asegure para tal ente la destinación anual en la Ley de Presupuesto los fondos

necesarios para un adecuado funcionamiento de los tribunales (y el Consejo de la Judicatura, si es que se consagra esa figura). Cabe recordar que ya existe un resguardo de este tipo en la actual en el artículo 97 de la Constitución, tanto para el Tribunal Calificador de Elecciones como para los Tribunales Electorales Regionales. Junto con ello, se considera imprescindible asegurar la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y juezas.

2. Facultad de dictar auto acordados

Cabe reiterar la necesidad de asegurar que, en caso de suprimirse las potestades económicas de los tribunales superiores, ello no debiera afectar la posibilidad de dictar auto acordados en materias procesales (en caso de omisiones legislativas o por mandato legal expreso).

3. Debida coordinación en las competencias de la Corte Constitucional y el Poder Judicial

La propuesta normativa referente a la Corte Constitucional establece varias disposiciones de suma importancia que perfilan de un modo distinto al actual a dicho tribunal. Más allá de esas definiciones, en lo que refiere a los espacios de relación de ese órgano con el Poder Judicial, cabe reiterar algunos aspectos destacados por la Corte Suprema en su oportunidad para superar problemas actuales:

- La oportunidad en que ha de permitirse la presentación del recurso de inaplicabilidad, limitándolo mientras el asunto esté siendo conocido por el tribunal de base y antes de ejercer cualquier recurso, puesto que posteriormente no es posible introducir cuestiones nuevas.
- Considerar una limitación a la duración temporal de la suspensión del procedimiento en que se ha promovido la cuestión de inaplicabilidad cuando ésta se decreta por el TC.
- Observar las situaciones transitorias que podrían quedar amparadas por disposiciones legales que resultarán eventualmente cuestionadas en cuanto a su vigencia a la luz del nuevo texto constitucional.
- La necesidad de norma que resuelva las contiendas de competencia que pudieren suscitarse entre el Tribunal Constitucional y los Tribunales Superiores de Justicia.

4. Garantía de un procedimiento simple, expedito y único, con un solo sistema recursivo.

Se estima pertinente abogar por la instauración, en la mayor medida posible, de un procedimiento único y simple, a fin de facilitar la comprensión del ciudadano de la forma en que puede hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia. Asimismo, se debiera procura simplificar el sistema

recursivo, superando la amalgama de fórmulas por las cuales conocen los tribunales superiores de justicia las decisiones de los tribunales de instancia, pudiendo ello expresarse como un mandato al legislador para que éste lo desarrolle, sin necesidad de especificaciones en la norma constitucional.

Junto a lo anterior, se considera necesario asegurar siempre a las personas su derecho al recurso en contra de toda decisión de carácter jurisdiccional.

5. Cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales de Derechos Humanos

Se considera apropiado que sea la Corte Suprema quien tenga a su cargo determinar la forma, modo y circunstancias en que se han de cumplir las sentencias emitidas por tribunales internacionales, en tanto impliquen la enmienda de los efectos de alguna decisión jurisdiccional. Esto, en caso alguno, importaría una facultad para dejar sin efecto lo fallado por el tribunal internacional.

6. Derechos de acceso a la justicia y debido proceso

Si bien se menciona el **acceso a la justicia** y el **debido proceso** como deber de los jueces en su actuación (conforme al numeral 3 del artículo 1 de la propuesta sobre función jurisdiccional, no se advierte en alguna de las propuestas presentadas alguna definición o desarrollo que permita dar contenido a ambos conceptos. Aunque se confía en que tales elementos serán incorporados en fases posteriores del proceso constitucional, sobre todo al considerar que la subcomisión abocada a la función jurisdiccional señaló expresamente que no abordaron tales materias a la espera de que lo hiciera la subcomisión de Derechos Fundamentales, se estima necesario recordar la amplitud y elementos que la Corte Suprema sugirió considerar como parte del concepto de acceso a la justicia, así como la extensión y alcance que debiera perfilar el debido proceso

8. Acciones constitucionales

Dentro de los aspectos no abordados, cabe hacer notar también que la propuesta de normas relativa a “Derechos Fundamentales, libertades, garantías y deberes constitucionales”, no contiene una proposición sobre una acción como el actual recurso de protección. Si bien se señala en los fundamentos de esta propuesta que esta acción sigue en estudio para precisar el listado de derechos y garantías protegidos por ella, se confía en que una disposición tan crucial será incorporada en una fase posterior, con apego al acuerdo que consignan esas mismas motivaciones explicitadas en los fundamentos de la propuesta, en orden a mantener las causales actuales para su procedencia, conservar su conocimiento en las Cortes de Apelaciones y que su objeto sea

restablecer el imperio del derecho. Sin perjuicio de lo dicho, cabe recordar que, tal como ya ha puntualizado esta Corte Suprema, la opción por consagrar la tutela de todos los derechos constitucionalmente establecidos mediante dicha acción u otra análoga, resulta ser la más adecuada y coherente con el principio de acceso a la justicia.

Finalmente, respecto a la propuesta de acción de amparo, resulta pertinente ampliar su objeto no solo a la libertad personal, sino también a la seguridad individual, tal como está actualmente regulado en el artículo 21 de la Constitución Política.

ooo